

Las acciones afirmativas frente a la multiplicidad de experiencia(s) indígena(s) en la representación política mexicana. Una crítica feminista decolonial

Daniela Lemus Muñiz¹

Marisol Pérez López²

Ponencia a presentarse en el
"XXXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES: América Latina y El Caribe, elecciones y virajes políticos".

Mesa: Derechos políticos y acciones afirmativas en elecciones federales y locales

CDMX, 2022

¹ Licenciada en Ciencias de la Comunicación (Comunicación política) por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestrante en Estudios en Relaciones Internacionales por el Programa de Posgrado de la UNAM. Actualmente labora como Secretaria Técnica de Investigación del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la FCPyS donde da clases desde hace 5 años. Correo electrónico: dlemus@politicas.unam.mx

² Egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, realiza su tesis titulada: *Patriarcado, capitalismo y colonialidad en México: análisis de los perfiles de Margarita Zavala y María de Jesús Patricio Martínez en el proceso electoral federal de 2018* con registro en el Centro de Estudios Políticos. Es becaria de titulación en el proyecto PAPIME: "Hacia una formación en comunicación con perspectiva de género: Diagnóstico de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UNAM (Plan de estudios 2016)". Correo electrónico: marisol.perez@politicas.unam.mx

Introducción

Las acciones afirmativas han constituido un mecanismo de inclusión y apertura de espacios para grupos excluidos sistemáticamente y subalternizados históricamente, bajo la consigna de la igualdad de derechos civiles y políticos al interior de las sociedades multiculturales de las democracias contemporáneas.

En México, las comunidades originarias, también nombradas pueblos indígenas, han vivido excluidas, durante muchos años, hasta que en 1992 se reconoce mediante una reforma constitucional la pluriculturalidad del Estado mexicano y en 2001, tras la firma de los Acuerdos de San Andrés, se incluye en la Carta Magna el reconocimiento de sus derechos políticos.

Dentro de estos colectivos, las mujeres han personificado diferentes tipos de liderazgo y práctica política, pero su experiencia no se debe homogeneizar por dos motivos: 1) la autodeterminación de estas comunidades, en el marco de sus propios usos y costumbres y 2) la diversidad étnica y cultural entre ellas.

Sin embargo, la experiencia de las mujeres indígenas en la representación política (descriptiva), comprende elementos que deben ser analizados para una comprensión más amplia de los mecanismos electorales que posibilitan dicha representación, en otras palabras, las acciones afirmativas tienden a unificar la condición de las mujeres indígenas.

En este sentido, el presente trabajo tiene como **objetivo problematizar cómo esta homogeneización puede obviar las diferentes matrices de dominación en un contexto patriarcal, colonial, capitalista y heteronormado como el mexicano**. Así, se busca cuestionar la efectividad de las acciones afirmativas implementadas en el proceso electoral federal 2020 - 2021 desde una mirada feminista decolonial.

La representación política moderna

La teoría de la representación en la historia del pensamiento occidental surge en el tránsito a la Modernidad y en el marco del liberalismo político. Antes de este momento, los representantes eran identificados en la teoría de las formas de gobierno como característicos de la monarquía o la aristocracia pero no propios de una democracia (Bobbio, 2014).

Sin embargo, en la Edad Media sucederán una serie de cambios en las relaciones comunitarias que servirán de base para pensar la representación de manera compleja. De esta serie de cambios podemos reconocer como importantes la institución de la encomienda, que cambió la forma en la que se entendía el posicionarse bajo la protección de otro considerándose la encomienda de la tierra como una relación contractual de la que surge el

vasallo territorial (Gizot, 2019); y, la práctica propia de la fundación de las ciudades medievales, que suponía un pacto colectivo público donde se manifestaba un consentimiento y compromiso expreso de respetar las “normas” contenidas en un documento que se leía en voz alta (Sassen, 2010). El reconocimiento de lo contractual en las relaciones productivas y en las relaciones políticas, será un antecedente importante, pero la pluralidad de la sociedad feudal no la convertía en democrática.

Posteriormente, surge una institución representativa diferente a la de la realeza, las asambleas. En ellas, nace lo que se conoce como representación de intereses, que es una forma de representación propia de los Estados estamentales medievales y consiste en el sometimiento del que representa al mandato del representado (Bobbio, 2012). De las asambleas, pasamos a los parlamentos medievales, hasta llegar al parlamento moderno, espacio que implica una dinámica que servirá como sustento para la idea de la representación política, entendida como una relación en el que el representante vela por el interés general sin someterse a ningún criterio más que el suyo. En este sentido, el principio de velar por el interés general le supone una responsabilidad política (Burke, 1942).

Más allá de la abstracción, en las sociedades históricas concretas en las que se dan estos procesos hacia la democracia representativa, sobresalen algunas condiciones materiales:

- La primera es el tránsito del feudalismo al capitalismo, y con ello, el desarrollo de procesos de acumulación originaria, es decir: procesos de despojo para la mayoría de la población existente en aras de separarla de las condiciones objetivas del trabajo y la producción, dejándoles en una situación en la que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo (relación capitalista - trabajador) (Marx, 1982);
- La segunda es el paso del patriarcado pre-moderno al moderno, es decir, con el desarrollo de los procesos de apropiación de los cuerpos de las mujeres y su trabajo reproductivo para los fines del capital, situándolas como seres no productivos y obligándolas a existir en relaciones de dependencia económica con los hombres (relación hombres - mujeres) (Federici, 2015);
- La tercera, es la expansión territorial del capital hacia Abya Yala (América), y por tanto, con el proceso de colonización de otro continente para la acumulación, el saqueo, la expropiación de bienes y la dominación y explotación sobre las personas que lo habitaban (relación europeos - personas racializadas) (Wallerstein, 2016).

El estatuto ideológico del capital, entonces, supone la aceptación de ciertos supuestos: los sujetos son iguales y libres, por lo que pueden producir en sus capacidades e intercambiar sus productos de acuerdo a sus necesidades, siendo coaccionados solo por su naturaleza

(Marx, 1982). Sin olvidar que estos sujetos son hombres blancos propietarios, ya que los obreros, las mujeres (incluidas las mujeres trabajadoras) y las personas racializadas no alcanzan su libertad e igualdad al ser definidos como seres “inferiores” básicamente por su naturaleza.

En consecuencia, la sistematización y difusión de la subjetividad surgida bajo las relaciones de producción capitalistas en un cuerpo coherente: el liberalismo político, partirá de supuestos importantes: el Estado de naturaleza, supuesto teórico que nos permite pensar “lo natural” de los sujetos desposeídos, las mujeres y las personas racializadas, en comparación con “lo artificial” creado por los hombres blancos civilizados y racionales; y, el contrato social, que parte de una noción del poder individualizada, donde los hombres blancos que son los únicos que cumplen con tener los derechos que les otorga Locke (2014) –derecho a la propiedad, la vida y la libertad– deciden asociarse políticamente, de manera voluntaria, sin coacción y racional.

Con ello en mente, la ciudadanía se constituye a través de finales del siglo XVIII hasta principios del XX por tres elementos fundamentales: civil (que refiere al compilado de derechos imprescindibles para la libertad individual), político (que refiere al derecho a participar de las distintas expresiones del poder en el marco de la vida política, ya sea como autoridad o como elector de la misma), y social (que refiere a aquellos derechos necesarios para brindar a los individuos un piso mínimo de bienestar y seguridad en general). Sin principio alguno de igualdad ciudadana frente a la desigualdad de clases y de derechos (Marshall, s/d).

En consecuencia, la definición occidental de representación política recupera también de las premisas de universalidad, individualidad, laicidad y utilitarismo. Por lo que el sujeto político de la modernidad occidental: el ciudadano, y su prototipo de existencia: el individuo; se basan en ser hombre burgués (con propiedad de los medios de producción), europeo y/o norteamericano blanco (para que puedan apropiarse del valor producido por todos los no-blancos) y heterosexual (para que pueda apropiarse del trabajo reproductivo de las mujeres). Así, la historia de la representación política, lo es también de un cúmulo de privilegios sociales de una clase determinada (económica, étnico-racial y sexista), viéndose limitada por múltiples opresiones sistémicas.

El incumplimiento, en mayor o menor medida, de estas características dicta la configuración de “no sujetxs” o “no ciudadanxs”. Lxs no sujetxs son todas aquellas personas cuya ciudadanía (y sus implicaciones civiles, políticas y sociales) y derechos son restringidos o no garantizados en el marco de la desigualdad por sexo-género, raza y clase social.

Excluidxs de las facultades de un ciudadano, las personas que pertenecen a estos grupos históricamente subalternizados, violentados, dominados y excluidos de la vida política del país de origen, se han movilizado y protagonizado múltiples reivindicaciones para abogar por su acceso en condiciones de igualdad al espacio público-político y los procesos de decisión.

Para hacer frente a esta desigualdad, surgen las acciones afirmativas, llamadas también discriminación positiva o discriminación inversa, las acciones afirmativas son “políticas públicas (de carácter temporal, correctivo, y de promoción) cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos” (Acciones Afirmativas, 2022), que suponen una estrategia jurídico-política de nivelación y equiparación de derechos y oportunidades para generar condiciones mínimas de igualdad sustantiva.

Aunque uno de sus antecedentes son las acciones compensatorias implementadas en la India, estos mecanismos cobran su dimensión en Estados Unidos con acciones dirigidas a las personas afrodescendientes, donde sobresalen aquellas registradas en 1935 en el News Deal Wagner Act, cuyo fin era establecer la obligación del Departamento Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos para solucionar la discriminación de los empleadores hacia la gente afroamericana; y las de 1941 escritas en el Decreto 8802, donde se prohíbe la discriminación de estas personas en la industria militar. Siendo en 1961, bajo el mandato del presidente John F. Kennedy, que se habla por primera vez de las acciones afirmativas en materia de igualdad laboral de las personas afrodescendientes como una política activa (Arámbula, 2008, p.9).

Pensadas como un mecanismo de inclusión y apertura de espacios para dichos grupos bajo la consigna de la igualdad de derechos civiles y políticos, son estrategias que se sostienen en el reconocimiento de la diferencia en las democracias contemporáneas. Por tanto, podemos pensar las acciones afirmativas en el marco de las políticas de reconocimiento y políticas de la diferencia, que tienen un sentido identitario. Es decir, estas políticas parten de asumir la diferencia como algo existente y atender a grupos cuya identidad está vinculada con esa diferencia para que puedan participar en la vida pública en “igualdad” de condiciones con respecto a los integrantes del grupo mayoritario - homogéneo.

De esta forma, el discurso de la diferencia anclada en la multiculturalidad (como una cosa político-cultural), coincide y amplía los supuestos del Estado liberal a los sujetos antes excluidos de este, sin cuestionarlos de fondo como resultado de la dominación material compleja (Fraser, 2016). Por tanto, estas acciones no se traducen en una transformación real de las exclusiones sino en la recuperación de ciertos rasgos identitarios, para atender la

desigualdad jurídica-política, sin dismantelar las lógicas opresivas que fundan esa desigualdad.

En otras palabras, las acciones afirmativas y las políticas de reconocimiento reproducen también los sistemas de dominación que históricamente relegan a los “no sujetos” y les impide de participar en la vida social y política, puesto que en lugar de dirigirse hacia la abolición de las diferencias creadas y motivadas políticamente por dichos sistemas, las reproducen dirigiendo acciones que requieren de que los sujetos oprimidos se identifiquen con sus opresiones (Curiel en Comunidad de Estudios Decoloniales de El Salvador, 2020).

En el caso que nos ocupa, la recuperación de la identidad sexo-genérica y/o étnico racial cumple una función de reconocimiento de las opresiones históricas de quienes las viven al formar parte de comunidades subalternizadas; sin cuestionar o disputar de fondo el origen de esa alteridad negativa. Por ejemplo, para acceder a las acciones afirmativas en México, las personas afrodescendientes deben identificarse como tales —lo mismo sucede con las comunidades indígenas y el concepto de autoadscripción— por lo que su acción es reivindicativa no emancipatoria, ya que, se reconoce y asume la diferencia sin aspirar a la eliminación misma del sistema racial que distingue blancos de todas las personas racializadas y establece una jerarquía entre ellos.

Por ello, resulta necesario antes de entrar a la situación misma de las mujeres indígenas en México y su participación política, detenernos brevemente en el funcionamiento del patrón colonial del poder en América Latina, siendo el que se nos impuso a modo de sistema sexo-genérico y étnico-racial a partir de la colonia.

Patrón colonial del poder en América Latina y México

La conquista del continente americano (1492) y el subsecuente proceso de colonización³ dio pie al poder global que articula al mundo hasta la fecha. Este proceso permitió el surgimiento de clases dominantes: “los europeos ‘occidentales’ y [posteriormente] sus descendientes euro-norteamericanos” (Quijano, 2019, p. 103), cuyas víctimas fueron los pobladores de Abya Yala (América Latina), África y Asia. Originalmente, el colonialismo comprendía dominación explícita y directa —es decir, territorial, política, social y cultural— de los conquistadores sobre los conquistados. Tal dominación ha sido abolida con las independencias de las colonias y la creación de nuevos Estados nacionales bajo los preceptos

³ Para el caso mexicano, se reconoce el inicio de la conquista española en 1519.

de soberanía y libertad. Por tanto, podemos afirmar que el colonialismo hoy día no existe, excepto por el caso de Israel y Palestina.

No obstante, el final del periodo colonial y la dominación directa sobre nuestros territorios no supuso la culminación simultánea de la colonización cultural, ya que esta experiencia histórica se articuló mediante una lógica de poder específica que continúa más allá de la ocupación europea. De esta forma, la colonización de las culturas del llamado nuevo mundo —ejecutada por medio de la represión sistemática de sus creencias, simbolismos y cosmovisiones, y perpetuada a través de lo que Quijano (2019) llama “los patrones propios de expresión de los dominantes” (2019, p. 105)— se mantiene como la expresión de dominación occidental a la que el autor refiere como colonialidad.

En consecuencia, la colonialidad supera al colonialismo (como etapa histórica), sobre todo, porque el poder colonial produjo desigualdades justificadas por el discurso de la diferencia étnica-racial y sexo-genérica que se mantienen hasta la actualidad por una narrativa sobre la naturaleza, lo que las dota de ahistoricidad e impide asumirlo como una expresión del poder colonial (Quijano, 2019). Prueba de ello es el debate surgido en México sobre la pigmentocracia, que tomó relevancia mediática en 2019 tras la publicación de un estudio realizado por investigadores del COLMEX (2022) sobre la discriminación en el país y que evidenció cómo opera el racismo, mostrando la jerarquía racial derivada de la colonia vigente tras más de dos siglos de independiencia.

Por ello, resulta necesario entender la colonialidad como un elemento constitutivo de la modernidad occidental capitalista y patriarcal que, como proyecto civilizatorio, se sostiene mediante la imposición de clasificaciones humanas en función de la pertenencia étnico-racial con la racialización y sexo-genérica con el sexismo, como argumento para la opresión. Es en estos términos que el pensamiento decolonial surge y propone repensar las categorías heredadas de la Europa colonizadora para desarticular las estructuras de poder que relegan y vulneran a todx sujetx que no cumple con los estándares de blanquitud del hombre propietario europeo y heterosexual.

En este sentido, una de las más importantes propuestas de la epistemología feminista decolonial, es la de entender la matriz de dominación como compleja, ya sea 1) partiendo de la interseccionalidad, que conjunta las opresiones capitalistas coloniales con las patriarcales (Lugones, 2014); o del 2) entendimiento de esta violencia como imbricada (Curiel, 2013). Para estas autoras, resulta imposible ignorar lo íntimamente ligadas que están las categorías sexualidad (orientación sexual) y género con la raza y la clase social, todas articuladas en el

proyecto civilizatorio moderno e impuestas en lxs sujetxs que habitaban y habitan el continente americano.

Lo que el abordaje feminista integra al pensamiento decolonial es cómo las personas latinoamericanas sexualizadas como mujeres (en relación con la masculinidad) y racializadas (en relación con la blanquitud) fueron subordinadas y desprovistas de toda autonomía y poder; en una escala más profunda que la que experimentan las mujeres blancas del primer mundo. Con ello, busca enfatizar las particularidades opresivas de su interrelación. Todas las personas somos racializadas y sexuadas dentro de la modernidad eurocéntrica capitalista, “mas no todxs somos dominadx o victimizadx por ese proceso” (Lugones, 2014, p. 61).

En México, como en otros países de la ahora latinoamérica, el proceso de racialización se dio en dos sentidos: con las personas traficadas de África como esclavxs y con las personas que habitaban el territorio antes de la colonia, así como los pueblos que la vivieron y resistieron. Así, en la ignorancia de los españoles, nombraron a las personas originarias: indígenas. Con ello, como nos explica Yasnaya Aguilar (2018) el gentilicio “indio”, que se refería a los habitantes de una región en Asia, se trajo al continente para referirse a las personas de manera despectiva.

Este nombrar no es un acto menor, supone un poder sobre lx sujetx nombrado y la imposición a éste de una identidad asociada a una clasificación arbitraria que beneficia a aquel que nombra. Esta capacidad de nombrar no deriva más que de una dominación de facto, de un ejercicio explícito y material del poder sobre una comunidad y sus miembros. En la colonia se establece entonces un sistema de castas (negrxs, indígenxs y blancxs) que determina la jerarquización social con base en características raciales donde, mientras más cerca se encuentre el individuo de la blanquitud, más alta será su posición social.

Asimismo, este sistema de castas muestra la relación entre la racialización y la división étnica internacional del trabajo, al destinar a las personas negras al trabajo esclavo (que en la narrativa se acababa con el capital, pero del que éste fue dependiente), a lxs indígenas al trabajo de servidumbre (también supuestamente superado) y a los blancos-mestizos al trabajo libre-asalariado. Como resultado, podemos observar una matriz compleja donde raza y clase social están mutuamente determinados (Robinson, 2021).

Lo mismo sucede con el género. En cada una de estas clases/castas se da una división sexual del trabajo donde los hombres tienen funciones de trabajo que crean valor mientras las mujeres se encargan del trabajo reproductivo. Por ejemplo, en el caso de las personas indígenas los hombres eran mozos y las mujeres sirvientas. Esto se debe a que, para lxs pobladorxs de América Latina, la dominación cultural colonial devino, entre otras cosas, en la

degradación de las mujeres en la jerarquía social; antes de la colonia no se habían articulado diferenciaciones sexogenéricas, pero la nueva organización social despojó a las mujeres de Abya Yala de toda clase de autoridad y ejercicio del poder. Tal reconfiguración —impuesta a semejanza del patriarcado europeo— permitió a los hombres indígenas obtener ventaja de las mujeres de su raza y reproducir los roles patriarcales (Cumes, 2014).

Si bien las mujeres indígenas fueron subalternizadas frente a los hombres indígenas, justo como sucedió a las mujeres blancas-mestizas con hombres blancos-mestizos, dichos procesos de subalternización no fueron para nada similares. Europeas y criollas fueron relegadas al espacio privado, donde se desempeñaron como amas de casa “delicadas [y] distanciadas del trabajo productivo” (Cumes, 2014, p. 69). Mientras tanto, el rol femenino de las indígenas justificó su trabajo reproductivo al interior de su círculo étnico-racial, pero, al exterior de este, sus cuerpos podían ser masculinizados para la explotación con fines productivos al igual que un hombre indígena, o bien podían ser nuevamente feminizados —de forma arbitraria— cuando a los fines de explotación colonial convenía.

En un segundo momento, durante la formación de los Estados-nación, la tradición totalizadora occidental continuó en el pensamiento de las élites latinoamericanas que lideraron los procesos de independencia, desarrollándose con ello la noción de los pueblos indígenas como unidad subalternizada. Así, en el proceso de constitución del Estado mexicano, esta actitud continuadora del entendimiento colonial que piensa a las comunidades originarias como un todo indivisible (indígenas) las contrapone con la nación mexicana (mestiza) que se estaba construyendo bajo los ideales de la modernidad europea.

Por tanto, no se puede pensar la construcción de la nación y la ideología del mestizaje, separadas de un proceso de diferenciación, objetivación y esencialización de los pueblos indígenas, que termina por homogeneizarlos e invisibilizar la multiplicidad de experiencias que suponen. Esto se hizo evidente durante el porfiriato, periodo en el que se legitimó el genocidio y la limpieza étnica —así como la expropiación y explotación de los indígenas bajo el discurso del progreso y la civilización— que marcó la pauta para el proceso revolucionario. Ejemplo de lo anterior es el exterminio de los yaquis en el norte del país.

En el periodo revolucionario, hombres y mujeres pertenecientes a comunidades originarias formaron parte de las filas levantadas en armas. Sin embargo, tras la revolución, se vuelve a la apelación de una “nación” homogénea protagonizada por una ideología del mestizaje que terminaba negando la diversidad existente. La Constitución de 1917 “postuló la igualdad jurídica de todos los mexicanos sin establecer distinción ni referencia alguna a la diversidad étnica de la población” (Singer, 2021, p. 62), sin reconocerles a las comunidades

originarias personalidad jurídica y garantizando no mucho más que la propiedad colectiva de las tierras bajo la figura de la propiedad gremial.

La búsqueda de integración de los pueblos indígenas asumió a estas comunidades como sujetos pasivos. Es entonces que, por medio de la política de asimilación, el gobierno mexicano se propuso la incorporación indígena en el proyecto de construcción de la nueva identidad nacional, lo que supuso eliminar todo aquello diferente bajo el paradigma de un México mestizo. La construcción de la nación, por tanto, buscaba la eliminación de lo indígena, mediante estrategias como la castellanización de las personas que pertenecían a estas comunidades, lo que fue en detrimento de su cultura y cosmovisiones además de frenar el desarrollo de identidades comunitarias y propias (Singer, 2021).

Comunidades indígenas en el México moderno: la imbricación de lo sexogénérico y lo étnicoracial

De acuerdo con Martha Singer (2021), en el México moderno, tras la política de asimilación y antes del levantamiento del Ejército Nacional Zapatista, pueden observarse cuatro posiciones sobre el asunto indígena: el indigenismo, surgido durante el cardenismo; la política de integración, que se presenta de 1948 a 1970; el populismo asistencialista, surgido en la década de los 70; y el indigenismo de participación. Las primeras dos, coinciden con la visión de las comunidades indígenas como sujetos pasivos, por lo que es necesaria su incorporación al “progreso material” (p. 65); en este sentido se desarrollan políticas de corte paternalista que no reconocían la capacidad de autodeterminación de los pueblos y que devinieron en programas clientelares. Reproduciéndose ya en el siglo XX el patrón colonial del poder.

Ante la crisis de estos proyectos, y en el marco de movilizaciones indígenas derivadas de las políticas educativas indigenistas, surgen posturas críticas, como la del populismo asistencialista y el indigenismo de participación, que reconocen en los planteamientos anteriores un colonialismo interno, por lo que abogan por un enfoque de participación donde los indígenas sean “conductores de su desarrollo” (p.72) creándose diversas instituciones con ese fin.

Asimismo, en las décadas de los 80 y 90, los pueblos originarios en todo el mundo empiezan a organizarse a nivel transnacional; organismos internacionales diversos se plantean la necesidad de reconocer y proteger derechos comunitarios. Así, en toda la región las comunidades indígenas se convierten en actores relevantes, que disputan su capacidad de autodeterminación y apelan por la garantía explícita de sus derechos (Stavenhagen,

2008). En México, esta lucha será protagonizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se levanta en armas en 1994.

Sin detenernos en este movimiento, cabe destacar que el levantamiento del EZLN evidencia las contradicciones del pensamiento occidental colonial, al resistir y oponerse abiertamente al discurso de “modernización” y “democratización” que acompañó la implementación del modelo neoliberal en el país, demostrando que este supuesto “desarrollo” es posible sólo a costa del exterminio cultural y que la validez del principio de igualdad no aplicaba a las personas racializadas del país. A su vez, es relevante decir que dentro del EZLN las mujeres tienen una participación igualitaria reconocida por la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas (1993), promulgada un día antes del levantamiento en armas, la cual señala la incorporación de las mujeres en la lucha zapatista “en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen” (Primera demanda).

A pesar de la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996 (entre el gobierno mexicano y el EZLN), los gobiernos panistas que siguieron no hicieron cambios significativos para estas comunidades, más allá de dos reformas constitucionales la de 2001 y la de 2011. La Reforma de 2001 reconoce el derecho a la autodeterminación y a la consulta en el artículo 2 constitucional, quedando definido el pueblo indígena de la siguiente manera:

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas (...) El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. (DOF, 14 de agosto de 2001)

Tres elementos sobresalen de esta redacción 1. el reconocimiento de que se nombra pueblo indígena a los grupos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio nacional antes de la colonia; 2. el derecho a la autodeterminación, principio del derecho internacional, instaurado en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuya intención era “permitir el proceso de descolonización a aquellos pueblos que se encontraban bajo el control de una potencia extranjera” (Villegas López, s/d, p. 1); y, 3. el principio de autodescripción, es decir, de la conciencia de su identidad como parte de la comunidad lo que supone el reconocimiento de sus miembros.

Entendiéndose por autodeterminación el derecho colectivo de los pueblos a determinar formas propias de gobierno y desarrollo político, económico, social y cultural, así

como de estructuración libre de sus instituciones. Es “un derecho político-electoral indígena relacionado con la autonomía de los pueblos a nombrar a sus propias autoridades, a ser votados, a elegir su propio sistema de gobierno, así como a ejercer algún cargo dentro de sus instituciones políticas” (Bustillo y García, 2014).

Así, se entiende como un derecho que asegura la participación política al interior de la comunidad; mientras podría pensarse que el derecho a consulta asegura una participación hacia el exterior, reconociendo a la comunidad como un interlocutor en los proyectos públicos. Con el fin de asegurar su representación en el Congreso de la Unión, en 2005 el Instituto Federal Electoral (IFE) realizó la primera redistribución electoral federal como acción afirmativa, en la que se identificaron 28 distritos indígenas (9.33% del total de los 300 distritos federales uninominales).

Por su parte, la reforma en 2011 eleva a nivel constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la que será significativa al hacer vinculante el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, lo que supuso una mejor definición de los derechos políticos y electorales de las personas indígenas en el país.

Posteriormente, Enrique Peña Nieto reconoció tres acciones dirigidas a los pueblos indígenas en el Pacto por México, sin embargo, no se tomaron acciones legales concretas para su realización, por lo que autores como Singer (2021) las consideran parte de una estrategia discursiva más que de un nuevo proyecto de nación. Durante su periodo, se realizó la reforma electoral de 2014 y en 2016 México suscribió la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que dio un nuevo impulso a las acciones afirmativas en cuestión de cuotas. Las acciones afirmativas serán desde entonces el mecanismo predilecto para la inclusión de los pueblos indígenas, sin embargo, como veremos a continuación esto no impacta de manera igualitaria a los hombres indígenas y a las mujeres indígenas.

Representación legislativa de las mujeres indígenas: 1988 - 2021

Uno de los argumentos centrales de este trabajo es que las acciones afirmativas tienden a obviar la heterogeneidad de los pueblos y comunidades indígenas, así como la de la experiencia desigual específica de las mujeres indígenas. En este sentido, cabría dimensionar la pluralidad existente en el país.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven 126 millones 14 mil 24 personas, de las cuales 25.7 millones de personas se autoadscriben a una

comunidad indígena; esto representa el 21.5% de la población (INE, 2020). Asimismo, información del International Work Group for Indigenous Affairs sostiene que en México habitan 68 pueblos indígenas, y cada uno es hablante de su lengua originaria propia (IWGIA, 2020). Estos se encuentran asentados mayoritariamente (75%) en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo (DOF, 2020).

La diversidad lingüística es prueba de la heterogeneidad de estas comunidades. Aunque podría pensarse que existen sólo 68 lenguas indígenas, se calcula que hay en total alrededor de 364 debido a las variantes de cada una, siendo las más habladas el Náhuatl y Maya. En México, el 6.1% de la población total habla una lengua indígena y de cada 100 personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español (INE, 2020; DOF, 2020). De todas las personas que hablan una lengua indígena, el 51.4% son mujeres (INMUJERES, 2020).

Todas y cada una de estas comunidades, debido a su comprobada diversidad, tienen el derecho constitucional a la autodeterminación en el marco de sus usos y costumbres, sin embargo, la existencia del derecho indígena no exime a estas comunidades de la adherencia y el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos, lo que supone reconocer, entre otras cosas, la igualdad entre hombres y mujeres al interior de la comunidad.

Aunque las personas indígenas experimentan violencias similares, es importante entender cómo se implantó el patrón colonial en el país, para problematizar no sólo su racialización, sino también su sexualización. Como se explicó anteriormente, una de las expresiones patriarcales que la occidentalidad impuso sobre los pueblos indígenas fue la subordinación de las mujeres a razón de su condición sexogenérica. Lo que ha significado que su participación política y política-electoral sea reiteradamente vulnerada, más incluso que la de los hombres indígenas y las mujeres blancas-mestizas. Como explica Bustillo (2014): “para las indígenas resulta un doble esfuerzo, debido a que su identidad ya no sólo se debe a su género sino también a su origen étnico” (p.61).

En teoría, las mujeres indígenas adquieren el derecho a votar y ser votadas al ser reconocidas como ciudadanas mexicanas al tiempo que las blancas-mestizas en 1953, ya que, supuestamente, la garantía del sufragio femenino fue una cuestión general. Al año siguiente, Aurora Jiménez de Palacios se convierte en la primera Diputada Federal en la XLII Legislatura, seguida por cuatro mujeres en la Legislatura XLIII: Marcelina Galindo Arce (Chiapas), María Guadalupe Urzúa (Jalisco), Remedios Albertina Ezeta (Estado de México) y Margarita García Flores (Nuevo León) (Cervantes, 2009). Ninguna de las cuales

se identificaba como indígena. Será hasta 1989 que la primera mujer indígena, Cirila Sánchez Mendoza (Oaxaca), ocuparía el mismo cargo en la LIV Legislatura y que en 1994 se convertiría en la primera Senadora (Dalton Palomo, s/fecha).

Dar cuenta de cuántas legisladoras federales indígenas hemos tenido es una tarea difícil, sobre todo porque, como puede verse en el trabajo de Sonnleitner (2016) los órganos legislativos no cuentan con estos registros y existen múltiples inconsistencias entre “quién se considera, puede ser o es considerado como un legislador indígena” (p. 43). Por tanto, es la propia “indianidad” de lxs legisladores un asunto de sumo complejo, lo que “obliga a subrayar la característica más importante de la identidad indígena: su flexibilidad e intangibilidad, como reflejo de procesos dinámicos, relacionales e intersubjetivos” (p. 49).

De acuerdo con su investigación, de 1988 a 2012, lo que abarca ocho legislaturas, hemos tenido 59 diputaciones indígenas de las cuales (1.4% del total de diputaciones), sólo 11 han sido mujeres (0.275% del total de diputaciones), distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 1. Diputaciones federales: mujeres indígenas (1988-2012)⁴

Legislatura	Total de diputaciones federales indígenas	Mujeres diputadas indígenas	Nombres	Estado	Partido
LIV (1989-1991)	4 (0.8%)	1 (0.2%)	Cirila Sánchez Mendoza	Oaxaca	PRI
LV (1991-1994)	0	0	-	-	-
LVI (1994-1997)	4 (0.8%)	0	-	-	-
LVII (1997-2000)	5 (1%)	2 (0.4%)	Aurora Bazán López	Oaxaca	PVEM
			María Baltasar Segura	Oaxaca	PAN
LVIII (2000-2003)	4 (0.8%)	0	-	-	-

⁴ Los porcentajes se sacaron con respecto a las 500 diputaciones federales por legislatura.

LIX (2003-2006)	7 (1.4%)	1 (0.2%)	Sofía Castro Ríos	Oaxaca	PRI
LX (2006-2009)	18 (3.6%)	2 (0.4%)	Rosa Romero Guzmán	Oaxaca	PT
			Yary del Carmen Gebhardt Garduza	Chiapas	PRI
LXI (2009-2012)	17 (3.4%)	5 (1%)	Juanita Arcelia Cruz Cruz	Oaxaca	PRD
			Sofía Castro Ríos	Oaxaca	PRI
			Florentina Rosales Morales	Guerrero	PRD
			Julieta Octavia Torres Marín	Puebla	PRI
			María Isabel Pérez Santos	Veracruz	PRI
TOTAL	59	11			

Fuente: Elaboración propia con base en Sonnleitner (2016).

Como se observa en la tabla, siete de las 11 mujeres han representado al estado de Oaxaca. Y, en su mayoría, fueron candidatas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). También se hace notorio que la redistribución federal en 2005 contribuyó a la ampliación de la representación legislativa indígena, logrando en la LX legislatura tener 18 legisladores indígenas (que equivalen al 3.6% de las curules, de los cuales 0.4% son mujeres). No obstante, aunque la cantidad total se ve incrementada en las últimas dos legislaturas, siguen siendo pocos representantes en relación con los 300 curules.

En este escenario, las mujeres indígenas siguen siendo una minoría, si vemos el porcentaje de mujeres indígenas en relación a los legisladores indígenas totales éste se va reduciendo, ya que en la legislatura LVII el 40% son mujeres indígenas, mientras en las siguientes cuatro legislaturas pasa de 0% a 14% después 11% y finalmente 29.4%.

Por su parte, el trabajo de Acosta (2016) no se enfoca en las diputaciones indígenas en general, sino en los y las diputadas electas al interior de los 28 distritos indígenas (por lo que

no integra datos sobre candidatus electus en distritos no indígenas). Su investigación muestra que durante la LX Legislatura (2006-2009) en los 28 distritos electorales indígenas resultaron electos como diputados 22 hombres y seis mujeres; en la LXI Legislatura (2009-2012) se eligieron 23 hombres y cinco mujeres; en la LXII Legislatura (2012-2015) se eligieron 16 hombres y 12 mujeres; finalmente, en la LXIII Legislatura (2015-2018) el resultado de la elección fue de 17 hombres y 11 mujeres, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 2. Diputaciones indígenas en Cámara de Diputados y Diputadas (2006-2018)⁵

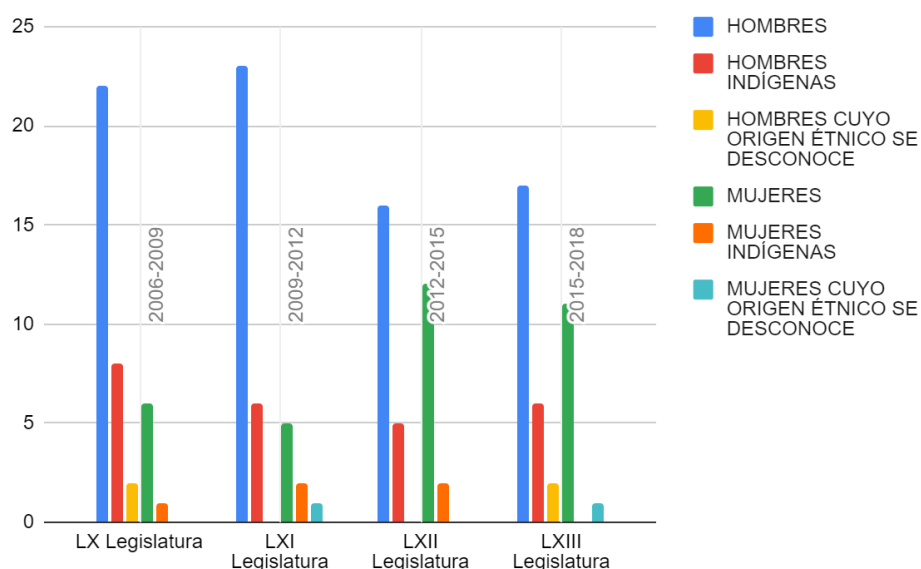
LEGISLATURA	HOMBRES NO INDÍGENAS	HOMBRES INDÍGENAS	HOMBRES CUYO ORIGEN ÉTNICO SE DESCONOCE	MUJERES NO INDÍGENAS	MUJERES INDÍGENAS	MUJERES CUYO ORIGEN ÉTNICO SE DESCONOCE
LX Legislatura (2006-2009)	22 (4.4%)	8 (1.6%)	2 (0.4%)	6 (1.2%)	1 (0.2%)	0
LXI Legislatura (2009-2012)	23 (4.6%)	6 (1.2%)	0	5 (1%)	2 (0.4%)	1 (0.2%)
LXII Legislatura (2012-2015)	16 (3.2%)	5 (1%)	0	12 (2.4%)	2 (0.4%)	0
LXIII Legislatura (2015-2018)	17 (3.4%)	6 (1.2%)	2 (0.4%)	11 (2.2%)	0	1 (0.2%)
TOTALES	78 (3.9%)	25 (1.25%)	4 (0.2%)	34 (1.7%)	5 (0.25%)	2 (0.1%)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Acosta (2016).

⁵ Los porcentajes se sacaron con respecto a las 500 diputaciones federales por legislatura.

Este fenómeno se muestra representado gráficamente a continuación:

Gráfica 1. Distribución distritos electorales federales indígenas (2006-2018)



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Acosta (2016).

Los datos contruidos por Acosta (2016) confirman, del mismo modo que los de Sonnleitner (2016), que las mujeres indígenas son una minoría subrepresentada, lo que no ha sido solucionado por los distritos electorales indígenas. Las categorías sexo-género y étnia-raza se vinculan como opresiones y tal vinculación configura una desigualdad político-electoral que se expresa como diferenciación en la obtención de puestos por lxs no sujetxs, siendo afectadas las mujeres blancomestizas por razones de género, los hombres indígenas a razón de racialización y, más notoriamente, las mujeres indígenas por la imbricación / interseccionalidad de ambas cuestiones.

En aras de asegurar la plena participación de las personas indígenas en todas las instituciones, el 22 de mayo de 2015 se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforma la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la CPEUM, donde se establece la garantía de que

las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales (DOF, 22 de mayo de 2015)

Asimismo, se agrega en los artículos transitorios la obligación de armonizar a esta reforma la legislación local en las entidades federativas en un plazo no mayor a 180 días. En este mismo año, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) publica la Guía de Acción Pública Elecciones sin discriminación (2015).

Ante el proceso electoral federal de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) decide implementar acciones afirmativas por medio de sistemas de cuotas y criterios (Acuerdo INE/CG508/2017) para lograr que los partidos políticos postularan, paritariamente, fórmulas integradas por personas indígenas en las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa en, por lo menos, 12 de los 28 distritos electorales federales indígenas. A estos 12, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le sumará otro distrito. En estas elecciones, tres curules de la Cámara de Diputados fueron ocupadas por mujeres indígenas (0.6%) y 10 por hombres indígenas (2%). Dos de las tres mujeres indígenas fueron candidatas de Morena: Manuela del Carmen Obrador Narváez (Chiapas) e Irma Juan Carlos (Oaxaca), mientras que Clementina Marta Dekker M Gómez (Chiapas) fue candidata del partido Encuentro Social (INE, s/fecha).

Esto demuestra que a pesar de la existencia de medidas diseñadas para la integración de los pueblos indígenas, éstas no garantizan el derecho a la participación política de las mujeres indígenas pues los espacios habilitados bajo criterios étnico-raciales no subsanan las diferencias sexogenéricas, situación que reclamaron las participantes en el Foro “Mujeres indígenas y afromexicanas frente el proceso electoral 2021” convocado por la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir de cara al proceso electoral federal 2021 (Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, 2021).

Donde denunciaron su exclusión de los procesos democráticos, la usurpación de candidaturas, la nula asignación de recursos, corrupción, así como expresiones de intimidación y violencia política hacia mujeres racializadas. En otras palabras, sostienen que la creación de espacios indígenas se mantiene como una expresión patriarcal donde las mujeres siguen sin poder accionar políticamente.

Esto sería posteriormente confirmado por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, durante su participación en el Conversatorio Participación Política de las Mujeres Indígenas al señalar que “en los hechos, la práctica social y la inercia institucional corren a ritmos diferentes” (CDHCM, 2021) y por el Consejo Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México con el Pronunciamiento 017 (COPRED, 2021) donde emite una recomendación para visibilizar las

brechas de género cuya intersección limita el acceso a derechos de las mujeres indígenas. Así, se observa que previo al desarrollo del proceso electoral federal 2021, se profundiza la discusión sobre la participación política y electoral de las mujeres indígenas y cómo las acciones afirmativas no resuelven su exclusión histórica, situación en la que ahondaremos en el siguiente apartado.

Completando los datos de la tabla 2, con información del Acuerdo INE/CG572/2020 la legislatura LXIV (2018-2021) quedan los totales:

Tabla 3. Diputaciones indígenas en Cámara de Diputados y Diputadas (2018)⁶

LEGISLATURA	HOMBRES NO INDÍGENAS	HOMBRES INDÍGENAS	MUJERES NO INDÍGENAS	MUJERES INDÍGENAS
LXIV Legislatura (2018-2021)	7 (1.4%)	10 (2%)	8 (1.6%)	3 (0.6%)
TOTALES	85 (3.4%)	35 (1.4%)	42 (1.68%)	8 (0.32%)

Elaboración propia con base en los datos del Acuerdo INE/CG572/2020.

Para 2021, se establece la postulación de candidatas y candidatos indígenas en 21 de los 28 distritos electorales indígenas y se adicionan nueve candidaturas de representación proporcional. Estos 21 distritos se dividen en tres bloques de competitividad en los que se deberán postular al menos 11 mujeres distribuidas de forma paritaria. En el caso de las nueve candidaturas de representación proporcional se establece que no puede haber más de cinco de un mismo género, en la circunscripción tercera y cuarta deben postularse hombres y mujeres de manera paritaria (ya que en las otras solo hay una candidatura) y al menos una fórmula deberá ubicarse en los primero 10 lugares de la lista (Acuerdo INE/CG160/2021; Acuerdo INE/CG18/2021; Acuerdo INE/CG572/2020).

Finalmente, en 2021, por medio del Compromiso de Santiago, instrumento regional instaurado para dar respuesta a la crisis del COVID-19 con igualdad de género que se adquiere en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se resuelve que los esfuerzos generados hasta el momento para incentivar la igualdad en los procesos de toma de decisiones no sólo deben mantenerse, sino que deben reconfigurarse con un enfoque progresivo para fomentar la representación femenina para la paridad, integrando

⁶ Los porcentajes se sacaron con respecto a las 500 diputaciones federales por legislatura.

un enfoque intercultural y étnico-racial que supone la participación de las mujeres considerando no únicamente su condición femenina sino también su pertenencia a un grupo étnico subalternizado. Esta es la primera vez que México reconoce un enfoque “interseccional”.

El INE reporta en su informe sobre acciones afirmativas que: “37 personas indígenas formarán parte de la Cámara (15 hombres y 22 mujeres). De los 15 hombres, 8 llegaron por el principio de MR, mientras que 7 por el principio de RP; en cuanto a las mujeres, 13 llegaron por MR y 9 por RP” (INE, 2021: 15). Sin embargo, este avance también se vio opacado por los 132 aspirantes a candidatos que simulaban ser indígenas, lo que comprueba lo ya denunciado por las mujeres indígenas y afrodescendientes organizadas: las cuotas han sido usurpadas y de ellas se han beneficiado mayoritariamente los hombres.

La información que se ha expuesto a lo largo de estos apartados permite confirmar que tales objetivos no han sido alcanzados. Las mujeres continúan enfrentándose sistemáticamente a la desigualdad y la violencia política y sus demandas de protección aún no han sido atendidas. Este fenómeno se agudiza en las zonas periféricas, donde la concentración de población indígena es mayor.

Dicho esto, concluimos que las mujeres indígenas enfrentan mayores obstáculos que sus congéneres blancomestizas o que los hombres indígenas de sus comunidades, y que estas no han sido atendidas por el proceso de homogeneización de los pueblos indígenas resultado del poder colonial patriarcal. La imbricación de sus opresiones, aunada al constante intento de unificación de los pueblos originarios, da como resultado la invisibilización de los rasgos identitarios de las mujeres indígenas mexicanas, que terminan sin pertenecer a los grupos que se busca atender por medio de las cuotas de género, al mismo tiempo que son desatendidas por las cuotas indígenas. Resulta lógico entonces que las cuotas continúen siendo insuficientes como medida compensatoria para garantizar la igualdad política indígena femenina.

Referencias

- Acuerdo INE/CG508/2017*. Instituto Nacional Electoral (INE). Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el proceso electoral 2017-2018.
- Acuerdo INE/CG572/2020*. Instituto Nacional Electoral (INE). Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto para el proceso electoral federal 2020-2021.
- Acuerdo INE/CG18/2021*. Instituto Nacional Electoral (INE). Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se modifican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el proceso electoral federal 2020-2021, aprobados mediante acuerdo INE/CG572/2020.
- Acuerdo INE/CG160/2021*. Instituto Nacional Electoral (INE). Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia dictada por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-21/2021 y acumulados, se modifican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el proceso electoral federal 2020-2021, aprobados mediante acuerdos INE/CG572/2020 e INE/CG18/2021.
- Acosta, Benjamin. 2016. *Diputados indígenas en México*. Tesis que para obtener el grado de Maestro en Periodismo y Asuntos Públicos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Repositorio digital del CIDE: <http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/587/150933.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Aguilar, Yasnaya. 2018. *Nosotros sin México: naciones indígenas y autonomía*. Recuperado el 18 de mayo de 2019 de Nexos: <https://cultura.nexos.com.mx/author/yasnaya-elena-aguilar-gil/>
- Acciones Afirmativas. 2022. Recuperado el 3 de agosto de 2022, de: <https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/acciones-afirmativas>
- Arámbula Reyes, Alma. 2018. *Acciones afirmativas*. [Pdf.] Recuperado el 2 de agosto de 2022 de: <https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-12-08.pdf>
- Bobbio, Norberto. 2012. *El Futuro de la Democracia*. México: FCE.
- Bobbio, Norberto. 2014. *La Teoría de las Formas de Gobierno en la Historia del Pensamiento Político*. México: FCE.
- Burke, Edmund. 1942. *Textos Políticos*. México: FCE.
- Bustillo Marín, Roselia. y García Sánchez, Enrique. 2014. *El derecho a la participación política de las mujeres indígenas. Acceso, ejercicio y protección*. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- CDHCM. 2021. *Necesario fomentar la participación de las mujeres indígenas en la Ciudad de México*. Recuperado el 10 de diciembre de 2021 de: <https://cdhcm.org.mx/2021/06/necesario-fomentar-la-participacion-de-las-mujeres-indigenas-en-la-ciudad-de-mexico/>
- Cervantes, Erika. 2009. *Martha Aurora Jiménez de Palacios*. Recuperado el 10 de enero de 2014 de: <https://cimacnoticias.com.mx/noticia/martha-aurora-jimenez-de-palacios/>
- COLMEX. 2022. *Color de Piel*. Recuperado de 10 de junio 2022, de: <https://colordepiel.colmex.mx/politica/?genero=Hombre&cargo=Candidato%20a%20Diputado%20Local%20Mr&periodo=Candidato%202018&nivel=Distrito>
- Comunidad de Estudios Decoloniales de El Salvador [Usuario]. 2020, 28 de octubre. *Diálogo con Ochy Curiel* [Live]. Facebook: <https://www.facebook.com/106369720777252/videos/723188631611292>
- CONAPRED. 2015. *Guía de Acción Pública Elecciones sin discriminación*. Recuperada el 2 de febrero de 2016 de: <http://sindis.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Guia-para-la-accion-publica-Elecciones-sin-discriminacion-Ax.pdf>
- COPRED. 2021. *Pronunciamiento 017*. Recuperado el 3 de septiembre de 2021 de: <https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-llama-visibilizar-las-brechas-de-genero-persistentes-en-el-dia-internacional-de-la-mujer-indigena>

- Cumes, A. 2014. *La india como sirvienta: servidumbre doméstica, colonialismo y patriarcado en Guatemala*. Tesis que para obtener el grado de Doctora en Antropología presenta en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Repositorio digital CIESAS. <http://repositorio.ciesas.edu.mx/bitstream/handle/123456789/283/D259.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Curiel, Ochy. 2013. *La nación heterosexual. Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación*. Colombia: Impresol Ediciones.
- Dalton Palomo, Margarita. (s/fecha). *Cirila Sánchez Mendoza*. Recuperado el 11 de enero de 2021 de: <https://ichan.ciesas.edu.mx/cirila-sanchez-mendoza/>
- Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1º, se reforma el artículo 2º, se deroga el párrafo primero del artículo 4º; y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la CPEUM. (14 de agosto de 2001). DOF.
- Decreto por el que se reforma la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la CPEUM. (22 de mayo de 2015). DOF.
- Federici, Silvia. 2015. *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Tinta y Limón ediciones.
- Faser, Nancy. 2016. “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era «postsocialista»”. En *¿Redistribución o reconocimiento? Un debate entre marxismo y feminismo*. España: Traficantes de sueños.
- Guizot, Francois. 2009. *Historia de los orígenes del gobierno representativo en Europa*. España: KRK Editores.
- Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. 2022. *Mujeres indígenas y afromexicanas alzan la voz ante exclusiones y violencias del proceso electoral 2021*. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de: <https://ilsb.org.mx/mujeres-indigenas-y-afromexicanas-alzan-la-voz-ante-exclusiones-y-violencias-del-proceso-electoral-2021/>
- INE (s/fecha). *Candidaturas indígenas. Elecciones 2018*. Recuperado el 1 de abril de 2022 de: <https://igualdad.ine.mx/elecciones/eleccion-2018/candidaturas-indigenas/>
- INE. 2021. *Reporte Acciones afirmativas 2021*. Recuperado el 10 de julio de 2022 de: https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/P3_Reporte_AccionesAfirmativas_PEF_20-21.pdf

- INEGI. 2020. *Censo de Población y Vivienda 2020*. Recuperado el 10 de enero de 2022 de: <https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P>
- INEGI. 2019. *Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos indígenas (9 de agosto)*. [Comunicado de prensa] Recuperado el 10 de enero de 2022 de: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/indigenas2020.pdf>
- INMUJERES. 2021. *Población indígena*. Recuperado el 6 de junio de 2021 de http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Poblacion_indigena.pdf
- International Work Group for Indigenous Affairs. 2022. *Pueblos indígenas en México*. Recuperado el 10 de enero de 2022 de: <https://www.iwgia.org/es/mexico/3745-mi-2020-mexico.html>
- Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas*. 1993. Recuperado el 1 de julio de 2022 de: <https://www.nacionmulticultural.unam.mx/movimientosindigenas/docs/598.pdf>
- Locke, John. 2014. *Ensayo sobre el Gobierno Civil*. México: Porrúa.
- Lugones, María. 2014. “Colonialidad y género”. En Espinoza (Comp.), *Tejiendo de otro modo: feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala*. (101 - 288 pp.). Universidad del Cauca.
- Marshall, Thomas Humphrey. (s/fecha). *Ciudadanía y clase social*. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. 79. pp. 297-344.
- Marx, Karl. 1982. *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858*. México: Siglo XXI.
- Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas*. (9 de septiembre de 2020). DOF.
- Quijano, Aníbal. 2019. “Colonialidad del poder”. En Walter, Mignolo (Comp.), *Aníbal Quijano. Ensayos en torno a la colonialidad del poder*. (101 - 288 pp.). Argentina: Ediciones del signo.
- Robinson, Cedric. 2021. *Marxismo negro. La formación de la tradición radical negra*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Sassen, Saskia. 2010. *Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Singer, Martha. 2021. *Representación y participación política indígena en México*. México: INE/UNAM.

- Sonnleitner, Willibald. 2016. *La representación legislativa de los indígenas en México. De la representatividad descriptiva a una representación de mejor calidad*. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Stavenhagen, Rodolfo. 2008. *Los derechos de los pueblos indígenas: desafíos y problemas*. Ponencia presentada en el XXVI Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 18 al 29 de agosto de 2008.
- Villegas López, María Antonieta (s/fecha). Restricciones a la autodeterminación de los pueblos. Cerrando brechas de desigualdad. Recuperado el 01 de julio de 2022 de: <https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/cigta/pdf/44villegas.pdf>
- Wallerstein, Immanuel. 2016. *El capitalismo histórico*. México: Siglo XXI Editores.